

El escándalo de los contenedores de Pdvál resumido paso a paso

Una culpa compartida

Alejandro Hinds*

EL PAÍS POLÍTICO



A medida que se conocen más detalles sobre el caso de la mercancía descompuesta hallada en almacenes y puertos, la responsabilidad rebasa los límites de Pdvál para expandirse hacia toda la estructura del Estado

El descubrimiento de un lote de alimentos descompuestos en Puerto Cabello, realizado por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el 27 de mayo, fue recibido como una noticia más del acontecer diario en la Venezuela politizada de los últimos años. Quizás la mayoría de la población nunca se imaginó lo que había detrás de esa mercancía vencida perteneciente a la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdvál).

Sin embargo, en la medida en que han aparecido nuevos lotes de productos dañados, han surgido denuncias sobre la venta de alimentos en malas condiciones para uso industrial y han salido a relucir informaciones de que la situación era conocida por muchos organismos del Gobierno. El caso se ha convertido en uno de los mayores escándalos que ha enfrentado el presidente Hugo Chávez desde que asumió el poder en 1999.

La cantidad de comida que se dañó en puertos y almacenes habla por sí sola. Aunque Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, declaró el 30 de junio de 2010 que sólo hay 30 mil toneladas en mal estado, un informe de gestión de Pdvál —fechado en ese mismo mes y filtrado a los medios de comunicación— señala que la empresa tenía en inventario más de 89.000 toneladas de productos “no conformes”.

Las denuncias provenientes de una decena de estados, por otra parte, sugieren que la cifra de alimentos descompuestos se acerca a 122 mil toneladas. Ese número equivale a todo lo que Pdvál vendió durante 2008, a 12% del millón de toneladas que la empresa ha importado en los últimos tres años y 17% de la reserva estratégica que el Gobierno prepara para garantizar el consumo nacional de los principales rubros por un mes.

Más allá de la cantidad de comida que efectivamente se perdió, hay otra serie de interrogantes que deben ser contestados por las autoridades: ¿Por qué se compraron tantos alimentos? ¿Cuánto dinero se gastó en esas importaciones? ¿Las adquisiciones se hicieron de manera transparente? ¿Por qué los productos se quedaron en los puertos? ¿Desde cuándo estaban allí? ¿No se

hizo nada para evitar que se dañaran? ¿Quiénes son los responsables?

Las explicaciones ofrecidas hasta ahora, aunque incompletas, ponen de manifiesto que en el Gobierno hay enfrentamientos y que la responsabilidad por la mercancía descompuesta supera los límites de Pdval –por el caso están siendo enjuiciados tres ex-directivos de la empresa– para expandirse no sólo hacia Pdvs, como su casa matriz, sino hacia todos los organismos del Estado relacionados con la importación de alimentos.

IMPORTACIONES EXCESIVAS

El informe de gestión de Pdval admite que las 597 mil toneladas de alimentos importadas durante 2008 triplicaron las 192 mil toneladas que la red estatal tenía capacidad de distribuir a través de sus puntos de venta. Pero afirma que esas compras en el exterior apenas representaron 34% de las 1.7 millones de toneladas que le encargó el Centro Nacional de Balance Alimentario (Cenbal) para ese año.

La cantidad encomendada a Pdval no sólo estaba destinada a ser comercializada por esta empresa. También debía servir para incrementar la reserva estratégica del Estado, complementar los suministros de la red Mercal e incluso distribuir entre los establecimientos del sector privado. Sin embargo, ninguno de los tres objetivos se cumplió, por lo que la filial de Pdvs se quedó con toda la mercancía.

El Cenbal –creado a principios de 2008 para coordinar la política gubernamental en materia de alimentos y combatir los problemas de abastecimiento en algunos rubros– está adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y lo integran funcionarios de los ministerios de Agricultura, Alimentación y Comercio, además de asesores cubanos. De manera que, desde el inicio del proceso, hubo participación de otros entes gubernamentales.

El documento señala, de hecho, que el Cenbal no sólo determinó la cantidad que se debía importar sino que asesoró y supervisó la gestión de Bariven, que asumió esta actividad por ser la filial de Pdvs encargada de las compras en el exterior. Cada semana recibía un informe que detallaba, por cada rubro alimenticio, los proveedores beneficiados, las toneladas adquiridas, los precios y las especificaciones técnicas.

El organismo incluso coordinó algunas transacciones. El informe explica que Bariven realizó la mayoría de las contrataciones mediante licitaciones, con la excepción de compras directas que se hicieron “bajo el auspicio de la Cancillería venezolana y la coordinación del Cenbal” dentro del marco de acuerdos bilaterales firmados con países como Argentina, Brasil, Ecuador, Portugal y Uruguay.

También los privados

Desde el Gobierno han intentado envolver a los privados en la descomposición de 122 mil toneladas de alimentos. “El problema son las redes de distribución porque son privadas. Redes que se movilizan bajo otros criterios. Ellos quieren aprovecharse y tenemos obstáculos, como el sobreprecio, porque no operan bajo los ideales socialistas”, declaró Rafael Ramírez, presidente de Pdvs, el 30 de junio. “No rehuimos a la responsabilidad del caso. Ponemos las cosas en su justa dimensión”, agregó.

También habría autorizado, una vez que los productos se vencieron, su venta a empresas que lo usarían como materia prima para la fabricación de otros productos de consumo humano o de alimento balanceado para animales. Aunque por esta circunstancia se señala directamente al actual presidente de Pdval, Carlos Osorio, que antes se desempeñaba como director de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas.

PUERTOS CONGESTIONADOS

A medida que los alimentos llegaron al país, Pdval se dio cuenta de que la cantidad importada no sólo superaba sus posibilidades de distribución sino que también rebasaba la capacidad operativa de los puertos venezolanos. Según el informe:

La infraestructura portuaria no respondía a las necesidades de las importaciones que se estaban realizando y se convirtió en un ‘cuello de botella’ para las operaciones.

Eso incluye en la lista de organismos que estaban al tanto de la situación al Seniat, como encargado del proceso de nacionalización de mercancías. Los ministerios de Alimentación y Salud también tienen su dosis de responsabilidad, porque –según el documento– uno de los problemas que enfrentó la filial de Pdvs al momento de sacar los productos de los puertos fue la tardanza de esos organismos en expedir los permisos necesarios.

Las más altas esferas del Ejecutivo tampoco eran ajenas al tema del congestionamiento de los puertos. Desde febrero de 2008, por ejemplo, existe la Comisión Presidencial para la Disposición Final de las Mercancías Declaradas en Estado de Abandono Legal en las Aduanas, integrada por representantes de la vicepresidencia y los ministerios de Comercio y Finanzas.

Pdval, además, presentó en enero de 2009 un plan extraordinario de extracción de contenedores que recomendaba “buscar la intervención directa y centralizada del Estado venezolano en estos asuntos” e implementar medidas como la declaratoria de emergencia portuaria, la descarga directa, la instrucción a los proveedores para que enviaran oportunamente la documentación y la contratación de más agentes aduanales.

El Ejecutivo le tomó la palabra y solicitó a la Asamblea Nacional que reformase la Ley Orgánica de Descentralización para que los puertos de El Guamache, Maracaibo y Puerto Cabello –hasta entonces administrados por las gobernaciones de Nueva Esparta, Zulia y Carabobo, respectivamente– pasaran a ser gestionados por una compañía estatal creada especialmente con ese objetivo: Bolipuertos.

La modificación legal se concretó en marzo de 2009, pero –a juzgar por los hallazgos de comida dañada– el regreso de la administración de los puertos al Gobierno central tampoco contribuyó al fin de descongestionarlos. De acuerdo al informe de la filial de Pdvsa:

La respuesta del Estado a este problema, como elemento de apoyo y solución, fue muy tardía, y dejó solas a Bariven y a Pdval con sus capacidades limitadas de respuesta.

ADVERTENCIAS IGNORADAS

La responsabilidad no está sólo en quienes de alguna u otra manera estuvieron involucrados en la importación excesiva de alimentos y en la acumulación en los puertos de productos que terminaron dañándose. Los organismos encargados de supervisar la gestión de la Administración Pública, como la Asamblea Nacional y la

Contraloría General de la República, también tienen su cuota de culpa.

La primera instancia nunca investigó el tema de las importaciones de alimentos ni del congestionamiento de los puertos, a pesar de que hubo peticiones en este sentido. Incluso aprobó, en febrero de 2010, un crédito adicional por 262 millones de bolívares para que el Ministerio de Alimentación comprara las 136 mil toneladas de comida que le hacían falta para completar la primera etapa de la reserva estratégica.

El contralor general, Clodosbaldo Russián, ha dicho que el organismo que dirige advirtió en su informe de 2008 sobre las deficiencias existentes en la cadena estatal de importación, almacenamiento y distribución de alimentos. Y el informe de gestión de la Contraloría correspondiente a 2009 revela que ese despacho también sabía que productos importados por una empresa estatal se dañaron en el puerto de La Guaira.

Durante una inspección realizada en la aduana guaireña en algún momento del año pasado –el documento no precisa la fecha– la Contraloría detectó 24 contenedores de leche con sacos del producto que presentaban dos fechas de vencimiento distintas, dos contenedores de pollo que llegaron cuando les faltaba poco tiempo para vencerse y ocho contenedores de carne con signos de descomposición.

Pero estas informaciones nunca llegaron al Ministerio Público, encargado de investigar penalmente las irregularidades detectadas por la Contraloría, según la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Este organismo, sin embargo, tampoco puede evadir su responsabilidad porque ignoró las denuncias presentadas en los últimos años, principalmente por dirigentes opositores al Gobierno, sobre el tema de los alimentos.

La lista incluye al gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo, que en abril de 2009 acudió a la Fiscalía superior de esa entidad para informar sobre la presencia en la aduana de Puerto Cabello de 8 mil contenedores con toneladas de alimentos dañados. También a Aura Montero y Neidy Rosal, diputadas del Consejo Legislativo carabobeño, que en febrero de 2010 denunciaron una situación similar.

El ex ministro de Agricultura Hiram Gaviria, por su parte, alertó en diciembre del año pasado que Pdval compró leche casi vencida –adquirida a precios de remate, pero facturada a valor de mercado– que no pudo destinarse al consumo humano y terminó convertida en insumo para alimento balanceado de animales.

*Periodista.

